

Guatemala: la institucionalización contrainsurgente

Oscar González Periodista mexicano, jefe del departamento internacional de "unomasuno", México.

Al cumplirse el 23 de marzo pasado el primer aniversario del golpe de Estado que lo llevó al poder en Guatemala, el general José Efraín Ríos Montt anunció solemnemente la reanudación de las actividades políticas en ese país centroamericano y a tal fin promulgó en ejercicio de los poderes ejecutivos y legislativos, que detenta conjunta y personalmente tres decretos: uno referido al funcionamiento de los partidos y asociaciones, otro sobre el registro de ciudadanos y un tercero acerca de la constitución de un tribunal supremo electoral.

Poco después, en abril, voceros diplomáticos guatemaltecos revelaron en San José de Costa Rica la decisión oficial de ofrecer una amnistía a los opositores desterrados, aduciendo que para éstos "ya es tiempo de volver al país y a la familia" puesto que no persiste razón alguna "para que nadie esté exiliado".

Una crisis económica sin precedentes

Conviene desde el principio desalentar cualquier ilusión desprevenida. En relación con los anuncios citados, no existe, en rigor, un repentino afán democratizador de parte del régimen de Ríos Montt. Contrariamente, todos los datos disponibles conducen a constatar que lo que está en gestación es un proyecto de militarización de la sociedad a marchas forzadas, que se intenta ampliar en las condiciones de la peor crisis económico-financiera que le tocara vivir a esa nación como resultado de casi tres décadas de dictaduras castrenses.

GUATEMALA EN CIFRAS

AREA: 108,886 Km²

POBLACION: 7.500.000 habitantes. Población Económicamente Activa: 31% en 1977, de esta población el 57% trabaja en la agricultura.

INGRESOS: El ingreso promedio general es de Q864.00 al año, el 5% de la población recibe 35% del ingreso anual. En el campo, el mínimo establecido: Q3.20 diarios. Real: Q1.20 diario promedio. El 72% de la tierra cultivable está en manos del 2% de los terratenientes.

SALUD: *De cada mil nacidos vivos, mueren 81 durante el primer año; 81.4% de los niños menores de 5 años tienen algún grado de desnutrición. La expectativa de vida es, en un promedio general, 50 años; promedio en el área rural: 41 años, promedio en la ciudad: 56 años. Sólo el 26 de los partos son atendidos en forma adecuada. Sólo 5% de los niños con desnutrición son atendidos por los servicios de salud. Sólo el 28% de los niños menores de un año reciben alguna atención médica. Sólo el 5% de los niños con problemas mentales son atendidos (de 20.000).*

VIVIENDA: *En 1980 el déficit de vivienda era de 659.169 unidades. 91% de las viviendas existentes están construidas con muros de adobe, caña, palos o madera. 70% de las casas tienen piso de tierra. El 73% de los hogares urbanos cuentan con servicio de agua potable, el 15% en los hogares rurales. Sólo el 28% de los hogares del país cuentan con alumbrado eléctrico; 68% la emplea en las áreas urbanas; 5% en las áreas rurales. Sólo el 41% de los hogares del país cuentan con sistemas adecuados de deposición de excretas, sólo 16% de los hogares rurales cuentan con ello. 59% de los hogares presentan condiciones de hacinamiento, es decir que en un dormitorio se albergan 3 o más personas; 78% de los hogares del país cuentan con un solo dormitorio en la casa. 60 de los hogares usan este dormitorio para cocina además de dormitorio.*

EDUCACION: *63% de las personas mayores de 7 años no sabe leer ni escribir. Sólo 45% de los menores de 14 años asisten a la escuela; sólo 46% de los niños de edad escolar primaria asisten a la escuela. Hay un maestro por cada 400 niños.*

REPRESION: *De 1954 a 1982 han sido asesinadas 83.500 personas. Solamente en 1981, se estima que hubo 13.500 víctimas. Actualmente hay un promedio de 36 personas secuestradas, desaparecidas o asesinadas diariamente.*

Para visualizar dicha crítica situación basta con citar algunos índices reveladores como los que señalan que la desocupación abarcó, en 1982, al 48% de la fuerza de trabajo disponible, que el salario real descendió en la última década en 18.5% y que el ingreso anual de por lo menos el 40% de la población no llega a los 60 quetzales (60 dólares según el cambio oficial).

De acuerdo a las confiables estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la tasa anual de crecimiento del producto bruto interno global fue el año pasado de menos 3.5%, a un índice positivo de 5.5% en el período 1975-78. Idéntica fuente revela que, considerado en relación a la población el PIB por habitante creció también negativamente en 1982 y se situó en menos 6.3%.

Sin insistir en una tediosa enumeración de indicadores económicos, estamos en condiciones de afirmar que por lo menos 4 de los 7.5 millones de guatemaltecos se encuentran en condiciones de absoluta miseria, situación que ejemplifican palmariamente los siguientes datos: 80% de la población sobrevive en términos de desnutrición, igual porcentaje de los habitantes es analfabeto (en particular los indígenas, que constituyen la mitad de la población) 76% de los residentes en la ca-

pital de la República no cuentan con agua potable, el déficit de viviendas sobrepasa con creces el medio millón.

Igualmente, cabe señalar la incidencia negativa que sobre la economía guatemalteca ejerce la recurrente baja en los precios internacionales de sus principales productos de exportación (en primer lugar el café, responsable del ingreso de por lo menos 20% de las divisas), proceso que conduce a los grupos propietarios a una creciente liquidez y por tanto, a reclamar liberalidades fiscales, créditos y financiamientos especiales.

De la militarización del Estado a la militarización de la sociedad civil

Es en este contexto que Ríos Montt un fanático religioso adepto a la secta fundamentalista norteamericana El Verbo se dispone a instaurar un "nuevo orden" confiado en su carácter de presunto "instrumento de Dios, mayordomo del Señor destinado a gobernar el país".

Lo cierto es que más allá de sus arrebatos providencialistas, este peculiar pastor de almas responsable de la muerte de millares de sus compatriotas encabeza desde marzo de 1982, un intento de recomposición de la estructura del poder. El objetivo es reagrupar al conjunto de la burguesía, hasta entonces fragmentada políticamente y varios de cuyos segmentos se habían convertido en severos críticos de las anteriores gestiones castrenses, a las que condenaban por la corrupción imperante y por su incapacidad para poner fin a la insurrección armada de los grupos guerrilleros.

Da cuenta de lo anterior la carta enviada por Ríos Montt a fines del año pasado, dirigida a los "14 grandes empresarios industriales, agrícolas y comerciales" a quienes se considera como "representantes de la iniciativa privada". En la misiva, dada a conocer públicamente por el Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista), el General-Presidente insta a la gran burguesía a una "acción concertada", a la vez que se compromete a favorecerla con diversas medidas gubernamentales y a "garantizar la lucha constante y reforzada contra la acción subversiva, hasta su erradicación completa".

Conviene recordar que Ríos Montt ya había incorporado a su gabinete a representantes de las cámaras empresariales, a las mismas que ahora convoca para que sus integrantes repatrien los capitales fugados (considerados en alrededor de los 500 millones de dólares), eviten el "amarillismo periodístico" y, sobre todo, aporten ingentes fondos para perseverar en la guerra contrainsurgente. Respecto a esto último, El gobierno exigía en el documento la entrega, el 12 de diciembre pasado, de 15 millones de dólares por parte de las cámaras comercial, industrial, agrícola y bancaria. Más otros 45 millones que deberían hacerse efectivos este 30 de junio. Ignoramos si la demanda oficial encontró eco entre los empresarios seguramente sí pero más allá de esa constatación, la sola demanda gubernamental

explícita el intento por lograr la consolidación de un polo unificado de poder, en la perspectiva del "nuevo orden" al que algunos opositores califican ajustadamente como el tránsito de la militarización del Estado a la militarización del conjunto de la sociedad civil.

Una democracia falaz

Sin Poder Legislativo (el Congreso fue clausurado en 1982), sin Constitución (rige un estatuto fundamental sancionado por Ríos Montt), sin independencia del Poder Judicial (los magistrados son designados por el presidente), de hecho el proyecto del régimen ya está en marcha. Su correlato en el plano militar son las campañas de "tierra arrasada" llevadas a cabo por las fuerzas armadas, de seguridad y parapoliciales en las zonas bajo influencia de las organizaciones insurgentes agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), integrada por el Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el núcleo de dirección del Partido Guatemalteco del Trabajo.

Mientras tanto, el persistente funcionamiento de los llamados Tribunales del Fuego Especial, que ya llevaron al paredón de fusilamiento a varios ciudadanos acusados de subversión y que tiene en su poder a otros 200, y la conformación de "patrullas civiles" en el campo con funciones paramilitares, contribuyen a presagiar el carácter del "nuevo orden". Ello se intentará imponer por más que se lo pretenda enmascarar bajo ciertas formalidades jurídicas, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente e, inclusive, a elecciones generales (con participación de la derecha y la ultraderecha exclusivamente) para una fecha aún indeterminada, quizás 1985 ó 1986.

Pero, Incluso el conjunto de disposiciones legales citadas perfilan los propósitos de Ríos Montt. Así, la Ley de Registro de Ciudadanos implicará la adopción de una Tarjeta Nacional de Identidad, requisito necesario para mantener un control más férreo sobre la población y el llamado Tribunal Supremo Electoral - organismo que regulará y hasta podrá anular los próximos comicios - se integrará en principio con los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia, todos ellos designados por Ríos Montt.

La falaz democratización anunciada por el régimen de Guatemala se vincula también finalmente, con una necesidad estratégica de las clases dominantes (que la casta militar ya integra en función de intereses económicos propios, no sólo gerenciales): la de recabar el apoyo financiero y bélico estadounidense. En ese plano, la administración Reagan, urgida por su empantanamiento centroamericano comenzó aprobando una cuota de 365 millones de dólares, sepultando así la interdicción impuesta por Carter en 1977 consistente en no conceder asistencia alguna mientras continuara la violación de los derechos humanos.

En su síntesis sobre la base de una política contrainsurgente de "tierra arrasada" y de "aldeas estratégicas", con ultrasecretos tribunales especiales, patrullas paramilitares y millares de refugiados, el "siervo de Dios" José Efraín Ríos Montt se propone a llevar a cabo el ambicioso proyecto de unificar con el apoyo de Washington al conjunto de la gran burguesía guatemalteca para así perpetuar y acrecentar sus ganancias y evitar la insurrección.

Queda por verse si la convergencia objetiva entre las acciones de la guerrilla y la oposición democrática, junto a los efectos de la crisis económica y las contradicciones internas que aún enfrentan los dueños del país, le permiten a Ríos Montt salirse con la suya.